

Cuarta edición del Informe 2014 Fundación BBVA-Ivie Crecimiento y competitividad.

Los desafíos de un desarrollo inteligente

Las señales positivas necesitan reforzarse con actuaciones capaces de generar empleo duradero y de calidad

- España necesita empresas más grandes y emprendedores con un nivel de formación más alto para consolidar el crecimiento y el empleo
- Es preciso involucrar al sector privado en la I+D+i con un apoyo selectivo y basado en información transparente sobre los resultados de grupos e instituciones de interés para el sistema productivo
- Se precisan actuaciones para mejorar el aprovechamiento del capital humano evitando los desajustes por sobrecualificación e incrementando las competencias
- Se necesitan políticas públicas eficaces que eviten la exclusión social

Madrid, 18 de diciembre de 2014.- Las señales positivas de recuperación de la actividad de los últimos trimestres, y de corrección de los desequilibrios, necesitan reforzarse con actuaciones que consoliden a medio plazo un crecimiento más generador de valor añadido capaz de generar empleo de calidad y unas políticas públicas eficaces que eviten la exclusión social.

El desempleo se ha convertido en el principal problema socioeconómico de España, porque lastra la recuperación económica y es la causa del aumento de la exclusión social y la pobreza. Para combatirlo se necesita crear puestos de trabajo cada vez más productivos y lograr que estos sobrevivan, evitando la destrucción en pocos años de gran

parte de las empresas y los empleos creados. La consolidación del crecimiento requiere dar pasos para alcanzar un tejido económico más productivo: aumento del tamaño de las empresas, mejora de la formación de los empresarios y la incorporación de conocimiento y de la I+D+i a muchas más actividades. En paralelo, es necesario contar con un sistema público financieramente sostenible, eficiente y equitativo, que se gestione por objetivos e impida la exclusión social.

Así lo indica el **Informe Fundación BBVA-Ivie 2014: Los desafíos de un desarrollo inteligente**, cuarto de la serie iniciada en 2011, que analiza los obstáculos que pueden dificultar la consecución de esas metas y señala qué palancas pueden facilitar los avances. El documento se enmarca en el Programa de Investigaciones Económicas que desde hace dos décadas desarrollan conjuntamente ambas instituciones. Ha sido elaborado por un amplio equipo de investigadores universitarios y técnicos del Ivie, y dirigido por Francisco Pérez, Catedrático de la Universidad de Valencia y director de investigación del Ivie.

Empleo duradero y productivo

De cada 100 empleos generados al año por nuevas empresas en España durante la crisis, apenas 55 se mantenían cinco años más tarde (en Alemania sobrevivían 75, y en Italia 68, mientras en Francia los empleos iniciales se habían convertido en 120). La diferencia con estos países se debe a la mayor mortalidad empresarial y la menor capacidad de las empresas supervivientes de generar empleo. La solidez del empleo generado por los autónomos es aún menor, en especial durante la crisis: en el periodo 2007-2012 el 73% apenas sobrevive un año, y solo la mitad dura tres años. Además, el pequeño tamaño de la mayoría de empresas limita su productividad y frena el crecimiento del empleo. En 2013 las empresas grandes ya habían recuperado el nivel de empleo que generaban en 2006, mientras que las pequeñas sólo mantenían el 80% del mismo.

El papel de las empresas en el crecimiento es clave puesto que el sector privado representa el 80% del empleo y la inversión, pero la productividad de las grandes dobla a la de las microempresas. Nuestro tejido empresarial se caracteriza por la muy reducida dimensión de la mayoría de unidades: un 94% son microempresas de hasta nueve trabajadores, que generan el 39,5% del empleo; el 6,1% son pymes -hasta 249 trabajadores- y generan el 35% del empleo. Las empresas grandes, representando solo un 0,1% del tejido productivo crean el 25,6% del empleo (en Alemania estos porcentajes son el 0,5% de las empresas y el 37,7% del empleo, y en el Reino Unido del 0,4% y el 47,7% respectivamente).

El estancamiento de las pequeñas empresas se debe en parte a que el actual marco jurídico y laboral y los incentivos fiscales en muchos casos desalientan su crecimiento y frenan su productividad (por ejemplo, no es obligatorio auditar las cuentas mientras que durante dos años consecutivos no se den al menos dos de tres circunstancias: contar con una cifra anual de negocios mayor a los 5,7 millones de euros, una plantilla de más de 50 empleados y/o un activo mayor a los 2,85 millones de euros).

Sin embargo, contar con más empresas grandes es importante porque son más competitivas y juegan un papel dinamizador en su entorno. Por ejemplo, difunden entre

proveedores y clientes avances tecnológicos y organizativos y actúan como motores de la internacionalización. Lo hacen apoyándose en un empleo más intenso del capital humano y una dirección profesionalizada, factores que favorecen el avance de la especialización en actividades de alto contenido tecnológico.

Acciones formativas para consolidar el crecimiento

Un factor relevante para que los proyectos de inversión resulten más rentables a medio plazo es que los emprendedores estén mejor preparados. Para ello es clave profesionalizar la dirección de las empresas, pues el nivel educativo de los directivos (el 83,5% poseen estudios superiores) supera ampliamente al de los empresarios, tanto los que emplean asalariados (37,6%) como los autónomos (33,7%).

Los autores del informe reclaman mayores esfuerzos formativos en varias direcciones en las que se advierten carencias muy preocupantes. Por un lado, la preparación básica y financiera de los empresarios autónomos es escasa y dificulta con frecuencia la viabilidad de sus proyectos (el 43,5% de los autónomos españoles solo tienen estudios básicos, frente al 23,8% en la UE-28). Por otro, solo uno de cada diez parados con niveles de estudios obligatorios realiza formación continua (frente al 30% de los que poseen estudios superiores).

Otro segmento sobre el que actuar es el de los universitarios laboralmente desajustados, afectados con frecuencia por una preparación que no se corresponde con su titulación y no favorece su empleabilidad. Los autores señalan que el 95% de quienes están ocupados en tareas que no corresponderían a su titulación no tienen las competencias que en otros países tienen los titulados superiores. En este sentido recuerdan que, según los datos del Informe PIAAC, en España el 46,1% de las personas con estudios superiores tiene niveles similares a los poseídos por la media de los egresados de secundaria obligatoria en Holanda, Austria, Japón o los países escandinavos.

La raíz de este problema está en la ineficiencia del sistema educativo pero también en que el tejido productivo español ofrece menos oportunidades de adquirir capital humano, por su especialización y porque el menor tamaño de las empresas no favorece el apoyo a la formación. El sistema educativo -mayoritariamente público- necesita, según los autores, una gestión mucho más orientada a los resultados formativos, que mejore la productividad e incentive la eficiencia de las instituciones responsables de las distintas enseñanzas.

Otro **factor que debe contribuir a reforzar a las empresas es que participen más en las actividades de I+D+i**, invirtiendo en las mismas de forma selectiva, ya que en España la empresa apenas representa un 53% de la inversión en I+D (63,3% en la UE-28) y solo 0,84 euros de cada 100 euros facturados por las empresas españolas son invertidos en innovar (1,06 euros en el caso de las grandes empresas). El esfuerzo debe realizarse facilitando el aprovechamiento de los recursos, mediante la colaboración con los grupos e instituciones de educación superior e investigación que ofrecen los mejores resultados (según indican el número de proyectos de I+D realizados, el número de patentes vigentes, los artículos publicados o los ingresos captados mediante trabajos para empresas por tipología de proyectos, etc.). Para fortalecer la colaboración con las

instituciones especializadas en estas actividades sería positivo que las empresas tuvieran acceso fácil a más información, transparente y fiable, sobre los resultados de los centros de investigación y desarrollo tecnológico y los grupos de especialistas más capaces de producir conocimiento útil para el sistema productivo. Los autores del Informe sugieren que sea el Ministerio de Economía y Competitividad, quien audite la información y coordine su recogida, con el apoyo del CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial) y de las distintas administraciones regionales que tienen cedidas parte de las competencias en I+D+i. De esta forma, se puede contribuir a involucrar a las empresas generando y difundiendo información sobre las unidades de I+D+i más productivas, las de mayor calidad y aquellas cuyos perfiles tienen mayor interés para el sistema productivo.

Políticas públicas eficaces

El sector público español también necesita seguir con las reformas para contribuir a superar la actual situación. El Informe señala que no está sobredimensionado en comparación con otros países europeos, pero presenta problemas importantes: déficits continuados, debidos sobre todo a la escasa capacidad recaudatoria del sistema fiscal; grandes diferencias de gasto por habitante entre comunidades autónomas (superiores al 50%), que cuestionan la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios; y bajos niveles de resultados en algunos servicios.

La escasa recaudación se deriva, fundamentalmente, de la multiplicidad de beneficios fiscales -tipos reducidos, exenciones y bonificaciones en los distintos impuestos-, que en 2014 representan cerca de 80.000 millones de euros, una cifra superior al déficit público esperado. La reforma fiscal en marcha debería haber abordado con más decisión el doble objetivo de reducir significativamente esas pérdidas de ingresos y redistribuir las cargas tributarias que en la actualidad inciden demasiado sobre el trabajo, perjudicando el empleo y el crecimiento. La lucha más eficaz contra el fraude y la economía sumergida es, asimismo, una exigencia financiera y de igualdad de trato al tejido productivo que respeta las reglas.

Los problemas de eficiencia del sector público han de ser abordados con urgencia porque reducen los resultados de los recursos empleados en políticas clave. Dos ejemplos relevantes son la baja productividad de muchas inversiones en infraestructuras por su escaso grado de utilización -ferroviarias, autovías, aeropuertos- y los pobres resultados educativos. Los niveles de comprensión lingüística y matemáticas de los jóvenes que acaban la educación obligatoria (Informes PISA) y de los adultos (Informe PIACC), se sitúan claramente por debajo de las tendencias internacionales. Por ejemplo, el gasto en educación por alumno en España es similar al de Japón, pero los resultados de PISA en este país superan a los nuestros en un 15%.

Otro terreno en el que la oferta formativa -reglada y continua- presenta carencias es el de su contribución a la empleabilidad. La formación continua es insuficiente para la gran magnitud del problema del paro y su funcionamiento deficiente, pues las empresas consideran que no se ofrecen a los trabajadores las habilidades que demandan los empleadores. Entre los parados el porcentaje de los que realizan formación continua es

bajo, en especial entre los menos formados (9,7%) y no mejora cuando se trata de parados de larga duración (8,8%).

Un crecimiento socialmente incluyente

El Informe señala que los retos a corto plazo para España "son de gran calado, por lo que no caben soluciones simples". Las interdependencias entre los problemas de las empresas y el funcionamiento de las instituciones para responder al desafío de volver a crecer de manera duradera requiere, según los autores, que la recuperación de la competitividad del tejido productivo vaya acompañada de medidas para que el desarrollo resulte socialmente incluyente. Para ello es decisivo que continúe la creación de empleo, que éste sea de calidad y que el sector público resuelva sus problemas de funcionamiento, pues afectan a su sostenibilidad financiera y a la eficiencia y equidad de sus actuaciones.

España es uno de los países que peor comportamiento ha tenido en términos de incremento de la desigualdad, la pobreza y el desempleo de entre los países de su entorno. El Informe señala que la población que padece distintos tipos de pobreza ha experimentado importantes crecimientos desde 2007, siendo el desempleo la principal causa del incremento de la desigualdad.

En 2013 un 26,7% de la población española padece pobreza monetaria (ingresos inferiores al 60% de los que disfruta la familia mediana); un 18,3% sufre pobreza material severa (entendiendo por tal que padece privaciones en al menos tres indicadores de esta lista: no puede tomarse vacaciones una semana al año, no puede realizar una comida de carne o pescado al menos cada dos días, no puede mantener la vivienda con la temperatura adecuada en invierno, no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, ha tenido retrasos en pagos de la vivienda principal o compras a plazos en el último año, no puede disponer de automóvil o tener ordenador personal); un 15,7% vive en hogares en los que las personas activas no logran trabajar el 20% del tiempo. El 5% de la población (2,3 millones de personas) se ven afectadas simultáneamente por los tres tipos de carencias y constituyen el núcleo del riesgo de exclusión social.

Los autores del Informe reconocen que los desafíos planteados "representan metas difíciles, pero solo lográndolas será probable que la sociedad confíe de nuevo en las posibilidades de mejora colectiva, gravemente dañada en estos años de crisis económica e institucional". El deterioro de la confianza en las instituciones -gobiernos, legisladores y agentes sociales- dificulta la aceptación social de sacrificios, pues muchos ciudadanos consideran que serían evitables con una Administración Pública más honesta, con menos casos de corrupción.

La falta de oportunidades y la corrupción dañan la disposición a cooperar, aumentando las tensiones sociales y los costes de transacción: el crédito se resiente debido a la falta de confianza, se requieren más avales, las empresas reclaman el pago al contado, aumentan los contratos temporales y el empleo y la inversión se frenan. "Sin ese capital social unas economías tan complejas como las actuales resultan más difíciles de gobernar, además de resentirse la eficiencia económica y el bienestar social y frenarse el crecimiento", señala el Informe.

Propuestas de actuación para consolidar el crecimiento productivo

La consolidación del crecimiento no solo se produce con la aplicación de reformas del sector público. España sigue necesitando un tejido empresarial más productivo, capaz de aprovechar el esfuerzo inversor como las economías avanzadas. Los autores insisten en que para conseguirlo se debe invertir más en activos intangibles que ayuden a rentabilizar las inversiones en capital físico y en educación: formación en las empresas, mejoras organizativas, innovación de productos y procesos, y uso intensivo de las TIC.

El Informe presenta hasta ocho propuestas de actuación para impulsar el crecimiento productivo. **Para favorecer el crecimiento empresarial** propone eliminar regulaciones que dificultan la competencia y el aumento de tamaño de las empresas, multiplicadas por la falta de armonización y coordinación entre las comunidades autónomas. Al mismo tiempo subraya la necesidad de apoyar a las empresas pequeñas a cumplir normativas generales pensadas para mejorar el funcionamiento de las unidades productivas como, por ejemplo, las auditorías de cuentas. Propone asimismo que las mejores prácticas de las empresas grandes actúen como referencia para otras empresas de menor tamaño. Por último, insiste en la importancia de atraer inversión extranjera directa para acelerar el cambio del tejido productivo.

Para promover la incorporación del conocimiento en las empresas los autores demandan el desarrollo de programas de formación continua de empresarios, autónomos y empleados que ayuden a minimizar la elevada mortalidad de muchas empresas en los primeros años de vida. Para ello deberían dedicarse recursos formativos apoyándose en la enseñanza presencial y en la basada en las nuevas tecnologías, y realizarse esfuerzos de sensibilización social sobre este problema de los autónomos. Asimismo subrayan la necesidad de apoyar de forma selectiva a la I+D+i.

Para fortalecer financieramente a las empresas conviene mejorar la financiación a los proyectos innovadores incentivando formas de financiación no bancaria, como el capital riesgo, el *crowdfunding* o los segundos mercados. También es necesario que las empresas innovadoras refuercen sus recursos propios para financiar los activos intangibles, generadores de valor pero difícilmente enajenables. Pese a que las posibilidades de financiación han mejorado, y se ha reducido el sobrecoste que pagan las pymes españolas con respecto a las europeas (en la actualidad se sitúa en 92 puntos básicos), conviene mejorar las condiciones de acceso a la financiación. Del mismo modo, hay que reducir la excesiva dependencia del crédito bancario, dado que en la actualidad el 58% de la financiación ajena de las empresas es bancaria (aunque 10 puntos porcentuales menos respecto a su valor máximo en 2008). Para ello el Informe propone que se incentive el acceso a la financiación directa en los mercados.

Igualmente los autores señalan la necesidad de incentivar la reestructuración temprana de empresas viables pero financieramente vulnerables, ya que uno de los condicionantes de la recuperación económica en España es el elevado endeudamiento de las empresas, cuya deuda representa el 112% del PIB, por encima de la media de los países de la eurozona (94,8%). Para ello proponen medidas como el impulso de procesos extrajudiciales o programas de reestructuración de deuda con participación de la hacienda pública en la misma, etc. Estas medidas, apoyadas por una reforma fiscal que

trate del mismo modo la financiación con recursos propios y con recursos ajenos, desincentivaría el exceso de endeudamiento.

Propuestas para un crecimiento socialmente incluyente

Los autores proponen desarrollar nueve actuaciones en favor de un crecimiento socialmente incluyente a través del sector público. **Para promover la igualdad de oportunidades** destacan la necesidad de desarrollar acciones especiales para la formación de los parados, en especial los de larga duración. Reclaman también una mayor difusión de las oportunidades de trabajo y más eficacia de los servicios de intermediación laboral, con sistemas de evaluación continuada y personalizada de las actuaciones y un uso intensivo de los recursos que a nivel europeo se asignan a estas finalidades. Asimismo, los autores proponen que haya igualdad de recursos para todas las comunidades con el fin de garantizar el acceso a los servicios públicos fundamentales -seguridad, sanidad, educación- en iguales condiciones. Asimismo sugieren priorizar acciones contra la pobreza y promover un pacto por la educación que reduzca la inestabilidad normativa y mejore los resultados.

Para garantizar la sostenibilidad financiera del sector público los autores proponen una reforma fiscal ambiciosa con un reparto de cargas tributarias más justo que el actual; impulsar la lucha contra el fraude por múltiples vías –la educativa, mediante la toma de conciencia de lo que significa, y la represiva, con acciones de inspección y castigo– y perseguir la economía sumergida porque, advierten, puede que destruya tantos empleos en las actividades que cotizan como los que se mantienen ocultos.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia de los servicios públicos los autores proponen revisar la ordenación competencial y financiera entre administraciones para evitar duplicidades, ineficiencias y asimetrías injustificadas de recursos entre territorios; fijar las prioridades de gasto con un horizonte de medio plazo y una gestión pública orientada a resultados, con objetivos definidos y una evaluación permanente, mediante indicadores cuantitativos y cualitativos. Integrar la cultura de la evaluación de las políticas públicas, siguiendo el modelo europeo en la concesión y programación de fondos estructurales, es imprescindible para su modernización y la rendición de cuentas a los ciudadanos, y para valorar la suficiencia de recursos y la eficiencia del sector público.